

# LA SOMBRA DE LA HORCA

«P OR cada miembro del IRA colgado en Gran Bretaña, nosotros ahorraremos a dos soldados británicos». Esta declaración de David O'Connell, jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano de Irlanda, fue publicada por la revista alemana «Stern» y se dio a conocer en Inglaterra el día mismo (11 de diciembre) en que en la Cámara de los Comunes se debatía una enmienda conservadora pidiendo el restablecimiento de la pena capital para los autores de actos de terrorismo que ocasionaran muertes. Pero O'Connell sabía de antemano que la enmienda a la Ley de Abolición de la Pena Capital, aprobada en 1965 y confirmada en 1969, no tenía probabilidad alguna de triunfar (fue rechazada, en efecto, por una mayoría de 152 votos). ¿Por qué hizo, entonces, esa declaración?

La prensa nacional, que en ocasiones anteriores ha aprovechado cualquier amenaza del IRA para aumentar su tirada diaria con grandes titulares en primera plana, esta vez se ha abstenido de hacer comentarios, temerosa, quizá, de infringir el contenido de la reciente Ley de Emergencias, que estipula, en términos no muy claros todavía, posibles sanciones contra todos aquellos individuos o entidades que difundan propaganda o declaraciones formuladas por el IRA.

En privado, sin embargo, se adelantaron las más diversas interpretaciones: que O'Connell, por ejemplo, mediante su reto quería forzar al Parlamento a reintroducir la horca con el fin de crear mártires para su causa; que, a sabiendas de que la enmienda iba a ser rechazada, le interesaba aparecer como un factor decisivo en el resultado de la votación para probar ante el público que los dictados del IRA se tenían en cuenta en Westminster y así varios maquiavelismos más. En mi opinión, su mensaje tiene una explicación mucho más sencilla: recordar simplemente al Gobierno británico que la cuestión de Irlanda no se puede solucionar por la fuerza; que si a los tiros del Ejército el IRA ha contestado, hasta ahora con más tiros y más bombas, a la horca contestaría con la horca, y que cuantas más medidas «draconianas» se tomen para tratar de aplastarlos, más violenta será la reacción de sus correligionarios.

Sus palabras estaban destinadas a actuar de recordatorio. Y, en este sentido, como se pudo

comprobar en algunas de las intervenciones durante el debate, surtieron efecto. Aunque también hay que decir, en honor a la verdad, que no influyeron demasiado en la votación. Esta fue libre. Se consideró, al igual que sucedió con los debates anteriores sobre la pena capital, que se trataba de un asunto en que los parlamentarios deberían votar según su conciencia y no siguiendo una línea partidista.

De los 369 diputados que se pronunciaron en contra de la enmienda, 55 lo hicieron desde la banca conservadora (entre ellos, Edward Heath y William Whitelaw, ex ministro conservador para Irlanda del Norte); 11, desde la liberal, y una media docena desde la nacionalista. Tres laboristas votaron con la mayoría conservadora que apoyó la enmienda, pero en total el «hanging lobby» (grupo pro horca) no obtuvo más que 217 votos. Hubo pocas abstenciones. La enmienda, patrocinada por Jill Knight, diputada conservadora por una de las circunscripciones de Birmingham, estaba redactada en los siguientes términos: «Esta Cámara opina que la muerte debería ser la pena aplicable a los actos de terrorismo que causen muerte, y, por lo tanto, pide al gobierno que presente en fecha próxima la legislación necesaria para que el Parlamento haga efectiva esa opinión».

Por la mayoría que se opuso a la enmienda, Brian Walden, diputado laborista por otra circunscripción de Birmingham (dentro de cuyos límites se encuentran los pubs donde murieron 21 personas a consecuencia de los recientes atentados), abrió el debate con una moción en la que se alegaba que: «Esta Cámara, aun reconociendo que el terrorismo político requiere que se revisen las actitudes prevalecientes en la actualidad, no opina que la reintroducción de la pena capital sirva para disuadir a los terroristas o reforzar la seguridad del público».

Los corresponsales parlamentarios de la prensa y la televisión coincidieron todos en que el debate fue memorable no sólo por el contenido de las intervenciones, sino por el «magnífico» espectáculo que ofrecía una Cámara, sin ataduras partidistas, dando libre curso a sus verdaderos sentimientos y convicciones.

Brian Walden, con gran intuición polémica, refutó por adelantado el argumento clave de su principal contrincante, la señora

Jill Knight: «Si se aprueba la enmienda —dijo—, una mujer que haya entregado explosivos a un hombre a sabiendas de que iban a ser utilizados para un asesinato (político), podría ir a parar al patíbulo; pero, en cambio, un hombre que hubiera cometido múltiples asesinatos, acompañados de violación, no podría ser condenado a muerte. ¿Por cuánto tiempo aceptaría el público este nuevo patrón de valores morales?».

Sin darse por aludida, Jill Knight, cuando le llegó el turno de hablar, declaró: «... Existe una diferencia crucial entre el asesinato de un individuo, cometido por otro individuo por motivos personales, y el asesinato de uno o varios civiles inocentes, perpetrado por un Ejército equipado y organizado que lucha contra el Estado».

El aspecto más curioso del debate, sin embargo, fue el hecho de que los ataques más ensañados contra el IRA no provinieran del «hanging lobby», sino de los laboristas, incluido el propio Brian Walden, quien, apenas hubo terminado con su edificante ejemplo de lo que podría pasar si se aprobaba la enmienda, comenzó a disparar salvas iracundas contra «esos individuos (el IRA), cuyo negocio es la muerte; esos individuos cuya principal fuente de inspiración es la horrenda imagen de la muerte».

En general, los argumentos esgrimidos en pro y en contra del restablecimiento de la pena capital podrían resumirse así: 1) En pro: la horca actúa como disuasivo; es necesaria como retribución y hay que restablecerla porque esa es la voluntad de la gran mayoría del pueblo británico. 2) En contra: el restablecimiento de la horca recrudecería la violencia; proporcionaría al IRA los mártires que anda buscando; incrementarían el número de secuestros para canjear rehenes por los condenados a muerte y (argumento que contradice el de la búsqueda de mártires por parte del IRA) forzaría al IRA a elegir, para sus comandos terroristas, a menores de dieciocho años (edad mínima para que pueda aplicarse la pena de muerte).

Roy Jenkins, ministro del Interior, agregó que, por estas y otras razones de tipo técnico, cinco de los seis oficiales de más alta graduación de la Policía metropolitana no creían conveniente restablecer la pena de muerte. Pero que no se creyera que los terroristas, arrestados y convictos, iban a ser puestos en libertad al

cabo de unos años de cárcel. Mientras de él dependiera —precisó— no se concederían amnistías, aun en el supuesto de lograrse una solución al conflicto irlandés. Tanto Jenkins como los colegas que a ambos lados de la Cámara se pronunciaron en contra de la enmienda, dejaron bien en claro que se daban cuenta de que su decisión iba en contra del pensar de la gran mayoría del electorado. En ocasiones como ésta, sin embargo, el diputado tenía que votar con acuerdo a los dictados no de un grupo de electores por importante que fuera, sino del interés nacional.

Y, a todo esto, ¿qué opinan los especialistas en la materia? En una entrevista publicada en «The Guardian», inmediatamente antes del debate, sir Leon Radzinowicz, ex director del Instituto de Criminología de Cambridge y considerado como uno de los criminólogos más eminentes de la actualidad, tras haber demostrado la injusticia y la ineficacia de la institución de la pena capital a lo largo de la historia de Inglaterra, precisó, refiriéndose al capítulo del terrorismo: «No se puede pedir a la política penal que resuelva los problemas políticos. Sería injusto para la política penal e injusto también para el asunto político que se tratara de resolver. Actuar de ese modo crearía la peligrosa impresión de que lo único que se requiere es eliminar al terrorista y que con ello la cuestión política se soluciona por sí sola. La Historia ha demostrado la falacia de este argumento».

¿Qué otras soluciones políticas le quedan al gobierno británico, después del fracasado intento de consolidar en Irlanda del Norte una administración compartida entre católicos y protestantes? Una sería entablar negociaciones con el IRA. Pero, dado el actual estado de opinión en Gran Bretaña, un paso en esta dirección (en el supuesto poco probable de que el gobierno contemplara la posibilidad de darlo) significaría el suicidio político del partido laborista. La otra sería la retirada de las tropas, más aceptable para el pueblo británico, con varios partidarios en el ala izquierda del laborismo (dentro y fuera del Parlamento), pero descartada oficialmente por Harold Wilson y su Gabinete.

Si mañana otra bomba causa más víctimas inocentes en un «pub» inglés, el pueblo, con razón, volverá a pedir la cabeza de los autores del atentado. Pero, ¿a quién culpará la Historia? ■  
EDUARDO DE BENITO.